

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero por el que se Regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto Orgánico de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

La norma sometida a informe prevé la modificación de los artículos 8 y 18 introduciendo dos pequeñas modificaciones en su redacción.

Así, el artículo 8 es objeto de reforma a fin de incluir dentro del contenido de los Registros integrados en el sistema distintos datos relacionados con las personas jurídica o entidades sin personalidad, como consecuencia de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010, que introduce un nuevo artículo 31 bis en el Código Penal, cuyo apartado 1 dispone que:

*“En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.*

*En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.”*

De este modo, los registros deberán contener los datos identificativos de las personas jurídicas o entidades sin personalidad penalmente responsable, incluyendo los referidos a su denominación, tipo de sociedad, número de

identificación fiscal, domicilio social o cualquier dato que permita la identificación de los entes sin personalidad.

En relación con esta reforma, debe recordarse que el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, es terminante al establecer en su primer inciso que “Este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas”, debiendo entenderse esta referencia efectuada a la totalidad de las normas de protección de datos, al considerarse que, conforme a las mismas, las personas jurídicas no son titulares del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Por lo tanto, la reforma del citado artículo 8 no afecta a la regulación del derecho a la protección de datos de carácter personal ni a las competencias de esta Agencia.

En segundo lugar, la reforma planteada afecta al artículo 18 del Real Decreto 95/2009 en el sentido de aclarar que será necesario para la solicitud de la cancelación o rectificación de los datos contenidos en el sistema que los documentos aportados, tales como el documento nacional de identidad o el número de identificación de extranjero o tarjeta de identidad o pasaporte, en su caso, se encuentren en vigor.

En este sentido, la memoria justificativa aclara que la reforma procede de la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo en el expediente 07030853 y recuerda la normativa aplicable al Documento Nacional de Identidad y a la documentación de los extranjeros que se encuentren en territorio español y las previsiones referidas a la vinculación de la eficacia de dicha documentación a que aquélla se encuentre en vigor.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 24.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercitarán “por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente”, añadiendo el artículo 25.1 a) que la comunicación dirigida por el afectado al responsable deberá contener “fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique”.

Como puede comprobarse, el documento aportado deberá ser válido y, por consiguiente eficaz. De este modo, dado que las normas a las que se refiere la Memoria Justificativa hacen depender la eficacia y validez de los documentos aportados de su vigencia en el momento de su aportación, la modificación del artículo 18 contenida en la norma sometida a informe es plenamente congruente con las exigencias establecidas en la normativa reguladora de dichos documentos y en la propia normativa de protección de datos de carácter personal.

En consecuencia, esta Agencia informa favorablemente el Proyecto sometido a su parecer.